

Bolivia: Cuarto intermedio pero con condiciones

MARTA DILLON :: 29/11/2019

Las dos caras del Golpe

"Andá a preguntarle a la yegua Kirchner", le dijo a este diario un coronel del EPI. Forma parte de los uniformados que defienden a las pocas mujeres racistas que impiden que las víctimas denuncien las muertes y torturas a los organismos internacionales. Al mismo tiempo, los bloqueos podrían volver si no se aprueba la Ley de Garantías que implique el cese de la persecución política contra miembros del MAS, el partido de Evo Morales.

"¡Somos representantes del pueblo, y somos pocas porque el pueblo está trabajando!", grita la mujer a un volumen que no guarda relación alguna con la pregunta que buscaba saber de qué se trataba el pequeño amontonamiento de personas que llevaban la bandera boliviana atada al cuello como una capa. Está indignada, roja la cara, fruncido el ceño, la mano agitándose como si fuera a golpear; es el tercer día de plantón frente a la Defensoría del Pueblo, a cargo interinamente -desde hace más de un año-, de Nadia Cruz, cuya renuncia se reclama bajo el cargo de "proteger a las hordas masistas", ese enemigo gigante, homogéneo y arrasador que tan bien se supo construir en los últimos dos meses aunque los muertos y las heridas estén de su lado. En la sede de la Defensoría iba a iniciar su tarea la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur que preside Checha Merchán, pero no pudo ser. No sólo por las indignadas sino porque la policía estaba dispuesta a protegerlas.

"Andá a preguntarle a la yegua Kirchner", dijo a esta cronista el coronel Alarcón, comandante de la EPI de San Pedro, mientras sacaba fotos con su celular a modo de amedrentamiento. "Ahora los tenemos registrados, ya sabemos para qué vienen ¡y no vamos a liberar la puerta porque nosotros no reprimimos mujeres!" Cientos de videos que circularon en redes de manera desordenada en las últimas semanas podrían desmentirlo, pero no era el momento. "Nuestra policía no es como esa masista que nunca defendió al pueblo, ¿por qué no se vuelven a su país? ¿Por qué no se meten en sus cosas?", dijo otra indignada mientras detrás de ella el coro gritaba "¡que se vayan! ¡a la cárcel con las hordas masistas y sus amigos argentinos!"

--Usted me ofende cuando habla así --le dijo un hombre de sombrero a la que habló de hordas y nunca dio su nombre, "por seguridad"-- eso es racista.

El griterío creció hasta tapar las bocinas de los autos, que eran muchas porque la calle se cortaba intermitentemente. "¡Eso es lo que hizo el Evo, el dictador, meter odio! ¡Yo no soy racista, ustedes son unos vándalos, violadores, asesinos y acá tienen a las que los defienden, ¿no?" El hombre siguió de largo, los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría decidieron ir a la oficina regional de El Alto y a la Comisión del Parlasur le tocó recibir las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en la Legislatura nacional, frente a la plaza Murillo donde, a la tarde, la policía también intentó evitar que ingresen un grupo de campesinas que habían bajado desde Ovejuyo, cerca del lago de las ánimas, donde las montañas rectas como murallas protegen varias poblaciones: Quiliwaya, Pedregal, Chaskipampa.

¿Es curioso que al mismo tiempo que Merchán, presidenta de la Comisión, tuvo que pedir personalmente que dejen ingresar a estas personas a la sala donde se tomaban las denuncias, en la sala de prensa se anunciara un proyecto para otorgar un aumento de sueldo para la policía y los militares “por su labor arriesgada”? Casi tanto como que el gobierno “de transición” que tiene como única función declarada el llamado a elecciones haga planes para reforestar la Chiquitania que ardió con las llamas que quemaron la amazonia brasilera, sin que la ministra designada, María Eva Pinckert, haya tomado el tiempo para averiguar que la reforestación inmediata podría dañar todavía más el ecosistema. Al mismo tiempo que la canciller Karen Longaric designa embajador en Estados Unidos --donde no hubo en los últimos diez años-- y amenaza con romper relaciones con México desde la pantalla de CNN si no se le entregan cinco ex funcionarios que encontraron refugio en la embajada a la espera de un salvoconducto que les permita salir del país.

“No les entregaremos ningún salvoconducto, son delincuentes comunes”, dijo Longaric sobre el ex gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, el ex ministro de gobierno, Juan Ramón Quintana, la ex ministra de Culturas, Wilma Alanoca; todos acusados de sedición; y de dos ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, acusados de fraude, aun cuando todavía no está presentado el informe final de la OEA tal como lo reconoció el lunes ese organismo a pedido del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

El clima en La Paz no sólo cambia al ritmo del sol que aparece intermitente y sube de inmediato la temperatura o de las nubes que lo cubren y obligan a cubrirse. El clima es esa tensión entre los testimonios que familiares y víctimas de la represión repiten cada vez que se les ofrece escucha --como ayer en la legislatura-- porque está asumido que la Justicia tiene que llegar desde más allá de las fronteras y la arremetida judicial contra quienes tienen o tuvieron cargos electivos o de funciones públicas. La misma cita para la sesión de mañana por la mañana para tratar el reglamento que complete la ley de elecciones extraordinarias está amenazada por las amenazas contra diputados y diputadas, senadores y senadoras.

“Yo no puedo salir sola por la calle, siempre tengo que estar acompañada; ya he recibido hostigamientos y amenazas”, dice la diputada Sonia Brito a Página/12, aunque de todas maneras ve síntomas positivos en el funcionamiento de “una bancada que se mantiene unida, que no va a dar lugar a la proscripción de nuestros compañeros y que confía en el acompañamiento internacional. Porque lo que pasa acá no es sólo importante para Bolivia sino para toda la región. Porque nosotros nos sentíamos cómodos, éramos la primera economía emergente de la región y no vimos venir la magnitud del golpe fascista.”

La voz de las bases se levanta

Sin anunciarlo, moviéndose en silencio desde Potosí, Santa Cruz y El Alto, desde El Beni y también desde La Paz; las organizaciones sociales, campesinas, de mujeres, sindicales, las 6 federaciones del trópico de Cochabamba --la lista es tan larga que ocuparía toda la página enumerar cada organización--, se reunieron para declararse como “Ampliado en resistencia al golpe” y debatir durante todo el martes cómo posicionarse frente al discurso de la pacificación asentada sobre un millar de detenidos y detenidas, 34 muertes y más de 800 personas heridas. “Todas las organizaciones necesitamos la pacificación, pero no a

cualquier precio ni tampoco a espaldas de nuestras bases. Por eso se hizo el ampliado, para poder debatir, para que lo que decidamos sea de conjunto”, dice Yolanda Calani, secretaria de juventudes de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, una organización que reúne a un millón de productoras de todas las zonas de país y también a profesionales y estudiantes.

Fue en el mercado Lauca Ñ y los seis puntos de acuerdo se sellaron por aclamación y con los puños en alto haciendo una pausa entre consenso y consenso para gritar “¡Gloria por los caídos!” dejando que fluya un dolor que es también rabia y que no cesa. Andrónico Rodríguez, el joven politólogo y cocalero del Chapare, fue quien enunció los acuerdos que incluyen la renuncia de Jeanine Áñez y el “apoyo moral a nuestro presidente” Evo Morales. Aunque sin dudas, lo más importante fue el anuncio de un cuarto intermedio en las movilizaciones para sumarse al deseo común de la pacificación del país pero no sin condiciones. A partir de ese momento se levantaron los últimos bloqueos que interrumpían la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz.

El cuarto intermedio podría terminar si no se aprueba la Ley de Garantías que implique el cese de la persecución política contra miembros del MAS o si no se deroga el decreto 4078 que, como dijo la senadora Eva Copa a este diario, es “una carta blanca para matar”. “El objetivo del ampliado es uno solo: encaminar la unidad de las organizaciones sociales en lucha”, dijo Andrónico Rodríguez al final del encuentro que también, entre sus acuerdos, dio un plazo de cinco días para que las autoridades del MAS IPSP para convocar a un “ampliado nacional”; una intimación desde las bases a reorganizar “la herramienta que se ha parido entre estas organizaciones”, según la definición de Yolanda Calani, quien además subrayó la importancia del último punto: que la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales entre en la mesa de unidad de donde habían quedado excluidas.

“Nosotras queremos estar ahí porque tenemos pliegos de reivindicaciones propios, sobre nuestros derechos al trabajo, a la salud sexual; pero también necesitábamos que nuestras bases nos autoricen a entrar en esa mesa donde la COB --Central Obrera de Bolivia-- se sentó sin dialogar con sus bases ni con nadie y por eso también le pedimos que rectifique su postura”.

Esta apuesta de las organizaciones de base es un escenario más que se abre y una posición de fuerza para empujar las garantías que la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional busca sancionar, una vez reglamentada la ley de elecciones extraordinarias, el camino más próximo a una salida política a una crisis que ha producido ya demasiadas heridas que están muy lejos de cerrarse.

Página 12

https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/bolivia-cuarto-intermedio-pero-con